

sobre solicitud de declaración de interdicción de demencia de Cristian Andrés Vargas Araneda, CNI 17.543.561-1, Rol V-37-2015, caratulado “Araneda”, se cita audiencia de parientes para el día 25 de agosto de 2015, a las 10.00 horas, deberán asistir todos aquellos que deseen hacerse parte de la solicitud.- Cuarto Juzgado de San Miguel.- Secretaria.

(IdDO 931366)  
**NOTIFICACIÓN**

Ante el Juzgado de Letras del Trabajo y Cobranza Previsional de la ciudad de Antofagasta, en causa RIT N° O-323-2015, RUC 15-4-0016807-2, caratulada “Araya con Seguryceman SpA”, se ha ordenado notificar a la demandada Seguryceman SpA, RUT N°76.160.191-1 y a la sociedad Grupo de Empresas Lince SpA División Servicios, RUT N°76.269.035-7, mediante aviso que se publicará en un diario a elección del demandante, conforme lo dispone el artículo 439 del Código del Trabajo respecto de la siguiente demanda extractada: En lo principal: Deduce acción de Nulidad del Finiquito, en subsidio inoponibilidad; y demanda por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones. Primer otrosí: Señala forma de notificación; Segundo Otrosí: Acredita personería; Tercer otrosí: Patrocinio y poder. Juzgado del Trabajo de Antofagasta. Dayan Naranjo Tapia, Abogado, actuando en representación según se acreditará de don Francisco Aladino Araya Zepeda, CI 4.470.714-4. Ambos domiciliados para estos efectos en calle Arturo Prat N° 461, oficina 804, Antofagasta, a US respetuosamente digo: Que vengo en interponer demanda en procedimiento de aplicación general, por nulidad del finiquito, en subsidio imposibilidad del mismo y despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de Seguryceman SpA, RUT 76.160.191-1, representada legalmente por don Lino Magdiel Céspedes, ignoro profesión u oficio, o quien a la época de notificación de la demanda la represente o ejerza funciones de administración conforme lo establece el artículo 4° del Código del Trabajo, domiciliados en Baquedano N° 637 2° piso, Antofagasta, y solidariamente en virtud del artículo 3° del Código del Trabajo en contra de Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, RUT 76.269.035-7, representada legalmente por don Moisés Saavedra Torres, ignoro profesión u oficio, o quien a la época de notificación de la

demanda la represente o ejerza funciones de administración conforme lo establece el artículo 4° del Código del Trabajo, ambos con domicilio en Luis Uribe N° 541, oficina 102, Antofagasta y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Rendic Hermanos S.A., RUT 81.537.600-5, representada legalmente por don Víctor Briceño Espinoza, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos con domicilio en Avenida Del Valle N° 819 Huechuraba-Santiago, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 D del citado Código Laboral, y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Farmacias Cruz Verde S.A., RUT 88.807.200-2, representada legalmente por don Miguel Celedón González, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos con domicilio en Arturo Prat N° 543, Antofagasta, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Flowserve Chile S.A., RUT 96.959.580-K, representada legalmente por don Juan Carlos Morena, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos con domicilio en Issa Pichara N° 830, sector B, Renca-Santiago, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo: Hechos: I- Los Hechos: A. Antecedentes de la relación laboral: a) Con fecha 2 de diciembre del año 2008, el demandante fue contratado por la empresa demandada Sociedad Comercial Manantiales Limitada mediante contrato indefinido, para desarrollar labores de guardia de seguridad en faenas pertenecientes a Rendic Hermanos S.A. Con fecha 3 de diciembre del año 2009, firma un nuevo contrato con Sociedad Comercial Manantiales Limitada

también de tipo indefinido. Con fecha 1 de septiembre del año 2012, sin haber mediado finiquito, firma un nuevo contrato esta vez con Seguryceman SpA, reconociendo los años de servicio prestados a Sociedad Comercial Manantiales Limitada desde el día 2 de diciembre del año 2008 al 31 de agosto del año 2012. Dicho contrato de tipo indefinido estipula en su cláusula segunda que las funciones se prestarían en las dependencias de Cruz Verde S.A. de la ciudad de Antofagasta. Con fecha 10 de octubre del año 2014, se firma finiquito en dependencias de la empresa Seguryceman SpA sin ser ratificado ante ministro de fe, conforme lo indica el Código del Trabajo, reconociendo tan sólo que el trabajador comenzó a prestar servicios a la empresa a contar del día 2 de diciembre del año 2009 a pesar de lo señalado en el contrato de trabajo firmado con fecha 1 de septiembre del año 2012. Este instrumento jamás es ratificado ante ministro de fe como lo establece el artículo 177 del Código del Trabajo, razón por la cual es totalmente inoponible al trabajador. Con fecha 27 de octubre del año 2014 firma nuevo contrato de trabajo de tipo indefinido con Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, a pesar que jamás existió un cese efectivo de los servicios prestados para empresa Seguryceman SpA, mutando tan sólo el nombre de la empresa. En dicho contrato se establece que las funciones de guardia de seguridad se llevarían a cabo en faena de la Empresa Flowserve Chile S.A. Se le indica al trabajador que la suscripción del finiquito mencionado anteriormente era una mera formalidad y que a través del nuevo contrato con Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, se mantendría con fuente laboral. A mayor abundamiento, el gerente general del Grupo Empresas Lince SpA es nuevamente don Lino Magdiel Céspedes Mánquez, apareciendo don Moisés Saavedra Torres tan sólo como representante legal. En contrato de trabajo firmado con Grupo Empresas Lince y en posterior carta de despido del trabajador de fecha 5 de marzo del presente año aparece firmando don Lino Magdiel Céspedes, como se podrá observar en la prueba que esta parte incorpore al efecto. Conforme al principio de Primacía de la Realidad, el trabajador no cesa en sus funciones entre la fecha del finiquito y el posterior contrato, ambos en octubre del año 2014, cambiando tan sólo la razón social de su empleador y la faena en la cual se desempeñaría. El actuar de las empresas Seguryceman SpA y Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, se encasilla a

la situación señalada en el artículo 3 del Código del Trabajo, esto es, “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior. Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos.” De hecho, las empresas Seguryceman SpA y Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, operan como un solo centro de imputación jurídica, pero a fin de evadir el cumplimiento de sus obligaciones legales y previsionales, se esconden una tras de la otra. Ambas tienen una misma dirección, teniendo giros similares, se intercambian a la hora de presentarse para contratar trabajadores, constituyendo en la realidad (aplicación del principio de primacía de la realidad y levantamiento del velo societario) un solo centro de imputación jurídica, y una verdadera unidad. De hecho estas empresas coinciden en miembros de sus directorios y otros antecedentes que demostrarán inequívocamente las argumentaciones aquí expuestas, y se transforman en el motivo por el cual esta parte demanda solidariamente a estas dos empresas. b) Por la prestación de los servicios señalados, el trabajador recibía una remuneración compuesta de los siguientes conceptos: sueldo base \$167.968, asignación colación \$90.000, asignación movilización \$78.000, viático \$57.000. En tal sentido, la remuneración bruta del trabajador es de \$392.968, siendo este monto el que debe tomarse en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones que correspondan asciende a dicha suma, según lo establece el artículo 172 del Código del Trabajo en cuanto señala que “Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato”, así lo ha entendido la Corte Suprema al señalar que corresponde computarlo dentro del cálculo del monto de la última

remuneración mensual del trabajador. c) La labor que le fue encomendada fue desempeñada en diversas faenas como se puede desprender del relato realizado, a través de diversos contratos civiles o comerciales que constituyen a las empresas que a continuación se mencionarán como empresa mandantes del empleador de mi patrocinado. 2 de diciembre del año 2008 a 31 de agosto de 2012: Rendic Hermanos S.A. 1 de septiembre del año 2012 hasta fines de septiembre 2014: Cruz Verde S.A. Principios de octubre año 2014 hasta el fin de la relación laboral 5 de marzo año 2015: Empresa Flowserve Chile S.A. B. Antecedentes del término de la relación laboral: Mi representado desde el mes de octubre del año 2014 le manifiesta en constantes oportunidades al empleador su malestar ante el incumplimiento del acuerdo de pago de los años de servicio, porque a pesar que mi representado accedió a firmar ese finiquito era simplemente porque el empleador le indicó que aquello era la condición para seguir con la relación laboral, siempre teniendo en consideración el trabajador que en este finiquito se le reconocían sus años de servicio. Sin embargo el supervisor, don Raúl Morgado se disgusta ante las quejas completamente justificadas de mi representado quien incluso habría solicitado a la nueva empresa que modificaran su contrato reconociendo sus años de servicio ante el no pago realizado por Seguryceman SpA. Con fecha 3 de marzo del presente año su empleador, a través de Grupo Empresas Lince, procede a despedirlo por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. Cabe hacer presente que en ningún caso se dan los presupuestos que configuran la causal en comento, sostiene esta parte que no es más que una maniobra para acallar las quejas del trabajador: - El despido de mi representado es absolutamente una cuestión acotada que en nada obedece a una situación general de la compañía, existiendo incluso más faenas en las que el empleador provee servicios. El empleador sólo realiza una escueta explicación que resulta ser inexistente. - El despido no cumple con el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que la carta se entrega el día 3 de marzo en la noche (29 días): Cuando el empleador invoca la causal de necesidades de la empresa para poner término al contrato de trabajo, debe dar al dependiente un aviso escrito con una anticipación de 30 días a lo menos, salvo que pague una indemnización sustitutiva equivalente a la última remuneración mensual devengada. Ahora bien, conforme a la doctrina



vigente de la Dirección del Trabajo, contenida en Dictamen 156/07 de 10.01.94, el empleador que invoque sin previo aviso dicha causal o con un aviso inferior a los 30 días que, como mínimo, exige la ley, debe otorgar en forma íntegra la indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador, siendo, en consecuencia, improcedente pagar la indemnización en forma proporcional a los días que faltaron para completar el total de 30. - Así las cosas el despido es indebido, injustificado o improcedente y ni aun cuando el empleador pretendiera justificarlo en sede judicial podrá hacerlo, ya que al no ser debidamente justificado en la comunicación de despido, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 454 que nos indica que “No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.” C. Cobro de otras prestaciones laborales: Conforme a lo señalado, y a título de indemnizaciones y otras prestaciones laborales pendientes a mi representado se le adeuda: a) Feriado Proporcional equivalente a 7,54 días: \$98.764 b) Indemnización sustitutiva del aviso previo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, se adeuda al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada, ascendente a la suma de \$392.968 c) Indemnización por años de servicio (6 años de servicio): (En total se adeudarían \$2.357.808.- pero se toma en consideración un pago de \$400.000 en el mes de diciembre 2014) \$1.957.308. c) Incremento legal del 30% de la indemnización por años de servicio establecido en el artículo 168 letra a del Código del Trabajo \$587.192. d) Remuneración adeudada de 3 días del mes de abril \$39.297. d) Intereses, reajustes y costas. Lo que da un total de \$3.075.529.- o la suma que SS. estime pertinente, más intereses, reajustes y costas de la causa. Derecho: 1. En cuanto a las formalidades del finiquito. La jurisprudencia ha sostenido que el finiquito es un instrumento cuyo propósito consiste en dejar testimonio escrito del término de la relación laboral y ajustar o saldar cuentas pendientes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Código del Trabajo. <sup>1</sup>El Código del Trabajo en su

artículo 50 faculta al trabajador para que renuncie voluntariamente a sus derechos laborales, y además se exige para que tal renuncia sea válida, que dicho documento sea suscrito con las formalidades que establece el artículo 177 del mismo cuerpo legal. Por su parte y tratándose el finiquito de una convención, la voluntad del trabajador debe manifestarse libremente y encontrarse exenta de vicios. Como señalábamos, el artículo 177 establece ciertas formalidades, pues debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber sido firmado por el interesado y alguno de los Ministros de Fe citados en esa disposición - entre ellos un Notario Público. Además, se ha agregado a esos requisitos la formalidad conocida como la ratificación, es decir, el ministro de fe actuante debe dejar constancia, de alguna manera, de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que se contiene en el respectivo instrumento. Por su parte, en el finiquito, debe constar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de las partes ha dado a las obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en que se dará cumplimiento a ellas, en caso que alguna o algunas permanezcan pendientes. 2. En cuanto al vicio de nulidad. El artículo 1451 del Código Civil señala que los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo. Se ha definido a la fuerza, como los apremios, físicos o morales, que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un acto jurídico. En el caso sublite nos encontramos ante la presencia de un error de hecho por parte del trabajador, sumado a la fuerza moral o psíquica, y como subgénero de carácter económica. Error de hecho. Este vicio del consentimiento se encuentra regulado en el artículo 1453 y siguientes del Código Civil. En lo concerniente al caso en cuestión dicho artículo prescribe en su primera parte: “Art. 1453. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiéndose empréstito y la otra donación;...” En la situación que nos convoca, podemos distinguir la existencia de este vicio, principalmente fundado en la circunstancia de que bajo el particular contexto de la relación laboral, la firma del finiquito y la aceptación de pago en cuotas era la condición para seguir con una fuente laboral. Resulta evidente que no le era conveniente al trabajador estar mal con su

empleador quien mantenía el control de la situación y era su proveedor de trabajo y consecuente sustento familiar. De esta manera el finiquito corno convención, adolece de un vicio de nulidad por cuanto la voluntad del trabajador no era tal y en definitiva no se produce el consentimiento libre y espontáneo. Nuestros tribunales junto con reconocer la posibilidad de renunciar a los derechos laborales en la etapa postcontractual la han limitado a propósito de una sucesión ininterrumpida de contratos a plazo, señalando que “el finiquito no tiene el mérito de poner término al contrato de trabajo, si de hechos posteriores a su firma se desprende de modo inequívoco que no ha sido la intención de las partes interrumpir o terminar el vínculo laboral, celebrándose entre las mismas partes un nuevo contrato con vigencia indefinida a contar del día siguiente del término anterior”. En el mismo sentido la jurisprudencia ha dado por probado el vicio de “fuerza” en la firma de varios finiquitos, cuando su firma era requisito para el pago del sueldo. Fuerza moral como vicio del consentimiento. Si bien ha existido una manifestación de voluntad ésta no ha sido libre ni espontánea, sino que ha sido arrancada por otro por efecto del temor que le generó a la víctima la amenaza implícita y actual de un mal futuro, consistente en la imposibilidad de continuar prestando servicios para el controlador común de las empresas demandadas. Hay una voluntad viciada, puesto que siempre existe la opción del rechazo, pero el miedo o temor es tan grave, que decide aceptar la propuesta que le formula el agente de la fuerza, a cambio de que no ocurra el mal del que ha sido amenazado, o a través del cual se ve condicionado. La regulación de la fuerza moral se encuentra en el artículo 1456 del Código Civil, pero su alcance supera los contratos (actos jurídico bilaterales), operando como vicio de la voluntad en los actos jurídicos unilaterales conforme lo prescrito en el art. 1007. En el caso en cuestión, la fuerza de parte del empleador, específicamente su representante, ha sido grave, injusta o ilícita, y además determinante, por lo que los requisitos de la misma para que esta se configure concurren adecuadamente, considerando además que, sin perjuicio de no ser un requisito de este vicio, la fuerza provino del mismo empleador, a través de su representante. 3. Caso especial de la fuerza económica. En Chile esta materia ha sido excepcionalmente tocada en sede civil y en el mundo es una materia controversia, debido a que existe una delgada línea (cuestión que analizaremos) entre

una negociación lícita y otra estimulada por fuerza económica. La fuerza económica se caracteriza por el hecho que un contratante amenaza incumplir el contrato previamente convenido frente a lo cual, el co- contratante (contra sus deseos e intereses) para evitar los perjuicios del incumplimiento, accede a “modificar” el contrato originario - en este caso a suscribir un finiquito para ser recontratado. En este caso, el co - contratante tiene un dilema puesto que por un lado, o acepta la modificación propuesta o bien demanda en un juicio los perjuicios irreparables o de difícil reparación. Esta capacidad de poder rechazar la propuesta, es lo que la diferencia de la fuerza física (estado de necesidad justificante y la bis absoluta). Dicha circunstancia provocaría que el acto sea anulable al considerar la perspectiva y condiciones de la víctima. Ahora bien, la cuestión estriba en determinar cuándo nos encontramos con un accionar abusivo que derive en fuerza económica. El problema fue resuelto en el derecho americano recurriendo a la “consideration” -Consideración -, que es el gravamen que debe tener todo contrato para ser exigible ante el derecho, de modo que una modificación a un contrato ya existente no tendría consideración, motivo por el que dicha modificación no sería exigible. Esta posición ha sido morigerada en dicho derecho, ya que actualmente, en algunos contratos no es necesario el requisito de la consideración, por lo que se recurre a un elemento de oportunismo en la modificación, logrando beneficios inapropiados, injustos o contrarios al principio de la buena fe contractual. Por lo anterior es que en Chile, al no existir la doctrina de la fuerza económica, los problemas de este tipo han sido resueltos por el Tribunal de la Libre Competencia- TDLC- (Decreto Ley número 211), con la figura de abuso del poder dominante. La jurisprudencia al respecto, emanada por el TDLC, ha señalado que el abuso de poder, sólo puede ser respecto a los pequeños proveedores y no respecto a los grandes, debido a que por ejemplo un supermercado no tendría poder dominante respecto a los grandes proveedores. Si bien esta normativa no dice relación con el ámbito laboral, no debemos desconocer que la posición dominante en la relación laboral la mantiene el empleador, en todo sentido, y que frecuentemente el trabajador es quien sufre de abusos a causa de ello. En conclusión la doctrina de la fuerza económica, podría tener cabida en esta rama del derecho, cuando, una de las partes abusa de su poder dentro del acto celebrado,

amenazando su incumplimiento o bien un retardo en el mismo que generaría consecuencias gravosas para la parte más débil, frente a lo cual, esta última acepta una modificación contraria a la buena fe, es decir, cuando existe un abuso de la posición dentro de dicho contrato. Ahí es donde la doctrina de la fuerza económica debe aplicarse y donde se sustenta de forma diferenciada a las instituciones antes descritas. 4. En cuanto a la inoponibilidad subsidiaria Como señalábamos, el artículo 177 establece ciertas formalidades, pues debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber sido firmado por el interesado y alguno de los Ministros de Fe citados en esa disposición -entre ellos un Notario Público. Además, debe ser ratificado, es decir, el ministro de fe actuante debe dejar constancia, de alguna manera, de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que se contiene en el respectivo instrumento. Es del caso SS, que el finiquito no ha sido otorgado con los requisitos que exige la norma, puesto que dicho instrumento fue realmente suscrito en faenas de la empresa, no apareciendo ministro de fe autorizando las firmas. En tal escenario, el finiquito que no fuere otorgado con las formalidades que exige el artículo 177, no podrá ser invocado por el empleador, y por ende resulta inoponible a esta parte. 5. Principios que informan el derecho laboral. Luego no se pueden desconocer los principios que informan el derecho laboral al respecto, y con ello nos referimos a los principios de protección, de irrenunciabilidad, de la primacía de la realidad y, el principio de la continuidad laboral. En cuanto a la primacía de la realidad, y siguiendo a Plá, significa que en caso de discordancia entre lo que consta en documentos o acuerdos y lo que ocurre en la realidad, debe darse preeminencia a esto último. El fundamento de dicho principio, se encontraría en la naturaleza particular del contrato de trabajo, el que al entender del profesor Mario de la Cueva, reviste la calidad de un contrato-realidad. Esta expresión implicaría dos sentidos complementarios: a) Que el Derecho del Trabajo para alcanzar la protección que persigue no debe atender sólo al contrato, sino que debe hacerlo en vinculación a la prestación misma de los servicios. En consecuencia, esta noción se centra fundamentalmente en el concepto de relación laboral como núcleo desde el cual debe proyectarse el resguardo a favor del trabajador. b) Que, en consecuencia, en materia laboral debe prevalecer la verdad de los hechos, sobre los



acuerdos formales. Tal como es posible observar, el principio de primacía de la realidad no escapa al sentido fijado para el conjunto de la legislación laboral, que no es otro que el de protección del trabajador. Es más, en tanto este principio se hace cargo de la desigualdad entre las partes, en términos de preferir la verdad de los hechos, sobre lo declarado en los contratos y otros acuerdos, se incardina con el Principio Protector, pudiendo perfectamente considerarse como una expresión particular de aquel. Por su parte, el principio de la continuidad laboral, cuya manifestación ha sido refrendada en diversos fallos de Tribunales Superiores de nuestro ordenamiento, y que implica que ante la presencia de una sucesión de contratos de duración determinada, debe tenderse a concluir que se trata de un contrato de duración indeterminada. En definitiva este principio instruye al juez, para que ante la duda, estime la duración del Contrato Individual de Trabajo, en la mayor extensión posible según los hechos y la realidad demostrada. La naturaleza jurídica del principio se basa en que normalmente el trabajo es la principal fuente de ingreso económico, por lo que el contrato debe considerarse lo más extenso posible, para así beneficiar al trabajador en la consolidación de situación jurídicas relacionadas con el trabajo. 6. En cuanto al despido injustificado. El artículo 162 del Código del Trabajo dispone “Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda. Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles.” Es así, que el artículo 162 del Código del Trabajo, en la parte final de su inciso 1°, establece como requisito esencial para que opere la comunicación o aviso de término de contrato de trabajo, que se comunique personalmente o por carta certificada al trabajador, consignando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda dicha causal. Pues bien, aunque el empleador indique o señale la causal del despido, en el evento que omite señalar con precisión y en forma circunstanciada los hechos en que

se basa para invocar dicha causal, entregando una mera disquisición de carácter muy general y sin precisión alguna respecto de cuáles, en qué forma y cuándo se habrían producido los hechos que sirvieron de fundamento a la causal invocada, provoca que el sentenciador resuelva que para poner término al contrato de trabajo del actor, no se ha cumplido con las disposiciones de orden público que le ordenan acreditar dichas circunstancias por lo que los trabajadores quedarían en la indefensión en la oportunidad procesal que les corresponde para reclamar de la ilegalidad. Sobre la carta de aviso de despido: Sobre este punto es de importancia señalar que este instrumento debe cumplir con los requisitos que establece nuestro legislador en el artículo 162 del Código del Trabajo, a saber: a) Informar la causal legal aplicada. b) Los hechos en que se funda el despido. c) El monto de las indemnizaciones que se pagaran por el término del contrato si correspondiere. Con el deseo de esclarecer aún más la situación, hago presente la posición de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual analizando la causal de despido del artículo 160 número 7, en relación a la carta de despido, expresa que “El artículo 162 obliga al empleador que decidiera poner término al contrato a comunicar al dependiente afectado tanto la causal que invoca cuanto los hechos en que se funda a objeto que se cumpla con el principio constitucional del debido proceso para que el trabajador quede informado para poder refutar o impugnar aquellas circunstancias o hechos que se le atribuyen como constitutivos de terminación de la relación laboral”. (Corte de Apelaciones de Concepción, 22 de julio de 2003, Rol N° 1.209-2003). Carga de la prueba: Es del caso señalar, que el deber de acreditar la causal de despido invocada recae en el empleador, toda vez que es éste quien ha puesto término al vínculo laboral. Por lo tanto, es el empleador quien debe formar la convicción en el tribunal de que los hechos relatados en la carta de despido tienen la capacidad suficiente para provocar la exoneración automática del dependiente. Por lo que en el caso sub-lite es carga exclusiva de la demandada el acreditar los hechos constitutivos de la causal invocada y la gravedad de los mismos, debiendo proveer al tribunal de los medios de prueba que así lo permitan. Todo lo anterior de conformidad al N° 1 del Art. 454 del Código del Trabajo, disposición que carga con la producción de prueba a la parte que ha generado el despido, debiendo esta acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones

a que se refieren los incisos 1 y 4 del Art. 162 de mismo cuerpo legal. Esta disposición y las formalidades establecidas para la carta de despido, apunta no solo a la posibilidad de defensa del trabajador frente a su despido y a los hechos que lo sustentan, sino que, a la posibilidad de defensa por parte del ex empleador respecto de la legitimidad de la terminación de la relación laboral. Se sostiene por esta parte que el despido es injustificado debido a que el empleador constantemente ha invocado las causales del artículo 159 N°4 y N°5, y la consecuente recontractación de los trabajadores, lo que deja de manifiesto que la aplicación de la causal en todas sus oportunidades no era legítima, sino más bien tenía por finalidad el subterfugio laboral, reservándose la información y conocimiento del momento en que realmente se pondría término a la relación laboral, engañando a los trabajadores para así evitar el pago de los años de servicios. Finalmente se invocó injustificadamente la causal del artículo 159 N°5, para poner término a una relación laboral de carácter indefinido conforme a los principios del Derecho Laboral, lo que a todas luces carece de justificación. 8. En cuanto a la indemnizaciones. El artículo 163 del Código del Trabajo establece que si el contrato de trabajo hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término de conformidad al artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio o por desahucio, deberá pagar al trabajador la indemnización por años de servicio que hubieren pactado contractualmente y, de no existir tal pacto, la equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente al empleador, indemnización que se encuentra limitada a 330 días de remuneración. Esta indemnización debe ser pagada por el empleador al otorgarse el finiquito, el cual, debe ser puesto a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la separación del trabajador, salvo acuerdo en contrario de las partes. De esta forma, lo que condiciona el pago del beneficio es el tiempo de vigencia del contrato, esto es, que haya estado vigente por un año o más y, en segundo término, que la causal aplicada para el término del contrato sea alguna de las establecidas por el artículo 161 del Código del Trabajo (Necesidades de la empresa o desahucio del empleador). El artículo 168 ya citado en cuanto al despido injustificado, se remite

expresamente a lo prescrito por el inciso cuarto artículo 162 en cuanto hace aplicable la indemnización Sustitutiva de Aviso Previo allí señalada, en el caso particular por la concurrencia de lo prescrito en la letra a) del 168, en consecuencia al ser una indemnización de derecho estricto, que resulta aplicable al verificarse la improcedencia del despido, resultaría procedente por la sola aplicación de la norma sin importar el aviso previo de 30 días que el empleador realiza para el solo efecto de evitar el pago de la indemnización señalada. Artículo 168: “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: Artículo 162 inciso 4: “Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagará al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada. La comunicación al trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente”. 9. En cuanto a reajustes e intereses. El artículo 63 señala que las sumas que los empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servicios, deben pagarse reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, devengando además el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. Todo lo anterior dentro del plazo legal estipulado en el artículo 510 del Código del Trabajo. 10. En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria: El artículo 183-A del Código del Trabajo describe la subcontratación de la siguiente manera: “Es trabajo en régimen de subcontratación, aquel

realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador a un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta o riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas”. Naturaleza jurídica de la subcontratación: Del examen del artículo 183 A del Código del Trabajo se colige que, para estar en presencia de esta figura, se requiere, copulativamente, que exista una obra o servicio, cuyo dueño la entregue a un tercero, el contratista, quien la realiza por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su subordinación y dependencia. Por su parte, el artículo 183-B del Código del Trabajo dispone que: “La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal. En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiese hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo. En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural”. En tal sentido, acreditándose que el actor prestó servicios en régimen de subcontratación y no constando que la relación contractual entre el empleador directo y el demandado solidario-dueño de la obra- hubiere terminado antes que el empleador directo hubiere puesto término al contrato de trabajo con el actor, y no acreditándose que la empresa mandaste haya hecho uso de su derecho a información y retención, corresponderá condenarlos en calidad de solidarios a pagar las prestaciones pertinentes. Por tanto,



en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 425, 41, 44, 73, 162, 168, 172, 446 y siguientes, armonizados con el artículo 510, demás del Código del Trabajo, y demás disposiciones legales pertinentes; Ruego S.ST: tener por interpuesta demanda por nulidad del finiquito, en subsidio inoponibilidad del mismo, y por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de otras prestaciones laborales en contra de las demandadas ya debidamente individualizadas en el presente escrito, darle tramitación y en definitiva acogerla en toda y cada una de sus partes, condenando a las demandadas al pago de las prestaciones adeudadas a mi representado y que han sido detalladas en el cuerpo de este escrito, las cuales por motivos de economía procesal se dan por expresamente reproducidas en este apartado a modo de peticiones concretas, o la suma que US estime pertinente, todo ello más intereses, reajustes y expresa condena en costas. Primer Otrosí: Vengo por este acto en interponer de manera conjunta con la acción deducida en lo principal de esta presentación, demanda por Nulidad de Despido, en contra de Segurycsman SpA, RUT 76.160.191-1, representada legalmente por don Lino Magdiel Céspedes, ignoro profesión u oficio, o quien a la época de notificación de la demanda la represente o ejerza funciones de administración conforme lo establece el artículo 4° del Código del Trabajo, domiciliados en Baquedano N° 637 2° piso, Antofagasta, y solidariamente en virtud del artículo 3° del Código del Trabajo en contra de Grupo Empresas Lince SpA División Servicios., RUT 76.269.035-7, representada legalmente por don Moisés Saavedra Torres, ignoro profesión u oficio, o quien a la época de notificación de la demanda la represente o ejerza funciones de administración conforme lo establece el artículo 4° del Código del Trabajo, ambos con domicilio en Luis Uribe N° 541, oficina 102, Antofagasta y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Rendic Hermanos S.A., RUT 81.537.600-5, representada legalmente por don Víctor Briceño Espinoza, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos can domicilio en Avenida Del Valle N° 819 Huechuraba-Santiago, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Farmacias Cruz Verde S.A., RUT 88.807.200-2, representada legalmente por don Miguel Celedón González, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos con domicilio en Arturo Prat N° 543, Antofagasta, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, y solidariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo en contra de Flowserve Chile S.A., RUT 96.959.580-K, representada legalmente por don Juan Carlos Morena, o según el artículo 4 del Código del Trabajo, por quien la represente a la fecha de la notificación de la demanda, ambos con domicilio en Issa Pichara N° 830, sector B, Renca-Santiago, o, en subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo: I.- Consideraciones de Hecho: a. Antecedentes del inicio y término de la relación laboral: En primer lugar, y a fin de evitar repeticiones innecesarias, invocando el principio de economía procesal, doy por expresamente reproducido todos los hechos relatados en lo principal de este libelo, y que resulten pertinentes. Conforme a los hechos citados mi representado decide iniciar el presente proceso, toda vez que su despido se ha convertido en indebido, injustificado o improcedente, además de adeudarse el pago de cotizaciones previsionales y de salud y seguro de cesantía. Cabe señalar, que a objeto de hacer una descripción más acabada respecto de la Nulidad del Despido, se adeudaba a mi mandante las siguientes cotizaciones: - Cotizaciones previsionales AFP Cuprum: Se adeudan las cotizaciones de diciembre 2008, diciembre año 2011, diciembre año 2012, enero-febrero-abril-mayo-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre 2013, enero y febrero año 2014, abril a septiembre año 2014, noviembre y diciembre año 2014, enero a marzo año 2015. - Cotizaciones de salud Fonasa: Declaradas y no pagadas: enero-febrero-marzo-agosto-septiembre-

octubre-diciembre año 2013, febrero-marzo-abril-mayo-junio-julio-septiembre-octubre año 2014, enero año 2015. No declaradas ni pagadas: febrero y marzo 2015, noviembre 2013, agosto y noviembre 2014, febrero y marzo 2015. - Cotizaciones de seguro de cesantía: Se encuentran adeudadas noviembre 2011, enero febrero-marzo-mayo-junio-julio-agosto año 2012. Consideraciones de derecho: En cuanto a la nulidad del despido. Como ya se ha señalado la empresa demandada, no ha efectuado el pago íntegro de las cotizaciones de AFP Cuprum u otra institución previsional, AFC y de Fonasa del actor, por lo que conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, el despido del cual fue objeto mi patrocinado no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo, por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo referido la empresa demandada deberá ser condenada al pago de las remuneraciones y demás prestaciones correspondientes al período comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del mismo. Cabe hacer presente que la nulidad del despido contemplada por el legislador laboral sólo tiene por objeto sancionar al empleador que no ha hecho el pago íntegro de cotizaciones legales. Le resta el efecto normal que el despido podría producir, sólo para mantener la obligación del empleador de pagar las remuneraciones devengadas posteriormente al despido mientras no se realice el pago referido, y no es el espíritu de la norma el mantener las obligaciones contractuales correlativas. De allí que el despido existe, es decir, la desvinculación se ha producido efectivamente. III.- Peticiones concretas por medio de este libelo solicito a S.S. que se declare nulo el despido, obligando al ex empleador de mi representado el pago de los siguientes conceptos: Cotizaciones previsionales AFP Cuprum: Se adeudan las cotizaciones de diciembre 2008, diciembre año 2011, diciembre año 2012, enero-febrero-abril-mayo-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre 2013, enero y febrero año 2014, abril a septiembre año 2014, noviembre y diciembre año 2014, enero a marzo año 2015. Cotizaciones de salud Fonasa: Declaradas y no pagadas: enero-febrero-marzo-agosto-septiembre-

noviembre 2011, enero-febrero-marzo-mayo-junio-julio-agosto año 2012. 2. Se haga efectiva la sanción que establece nuestro legislador en el artículo 162 del Código del Trabajo, ordenando el pago de las remuneraciones devengadas desde el despido hasta que se concreté el pago íntegro de las cotizaciones ya señaladas, y se comunique así al trabajador, además de las cotizaciones que se generen durante dicho periodo. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y lo previsto en los artículos 162, 168, y siguientes del Código del Trabajo y demás normas legales citadas. Ruego S.S.: tener por interpuesta demanda laboral en procedimiento monitorio por nulidad del despido, en contra de las demandadas ya debidamente individualizadas en el presente escrito, darle tramitación y en definitiva acogerla en toda y cada una de sus partes, condenando a las demandadas al pago de las remuneraciones mensuales devengadas, posteriores al despido, mientras este no sea convalidado mediante el pago íntegro de las cotizaciones legales previsionales y la comunicación de dicha circunstancia al trabajador, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria, conforme lo señala el artículo 162 del Código del Trabajo. Segundo Otrosí: Sírvase US tener presente que mi personería para actuar en estos autos consta de Mandato Judicial suscrito ante Notario Público, el cual acompaño en este acto. Solicito tener presente además que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión vengo por este acto en asumir el patrocinio en estos autos. Tercer Otrosí: Sírvase a US tener presente que vengo por este acto en señalar como forma válida de notificación para futuras actuaciones en el proceso el siguiente correo electrónico: [notificacionesestudionaranjo@gmail.com](mailto:notificacionesestudionaranjo@gmail.com). Resolución del Tribunal: Antofagasta, veintisiete de abril de dos mil quince. Previo a proveer, conciliase la presuma de la demanda en cuanto al nombre del representante legal de la demandada solidaria 1 y la suma respecto de lo principal y primer otrosí; todo dentro de tercero día bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y archivar los antecedentes. RIT O-323-2015 RUC 15-4-0016807-2. Proveyó don Jordan Rodrigo Campillay Fernández, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Cumple lo ordenado: Cumple lo ordenado. S.J.L. del Trabajo Dayan Naranjo Tapia, por la parte demandante, en autos caratulados “Araya con Segurycsman SpA” RIT O-323-2015, a US respetuosamente digo: Que vengo en cumplir lo ordenado

por SS. En orden a aclarar el nombre del representante legal de la demandada solidaria 1, advirtiendo un error involuntario cometido en la presuma de la demanda, debiendo señalar ésta lo siguiente en cuando a la individualización del demandado: Demandado Solidario 1: Grupo Empresas Lince SpA División Servicios, RUT 76.269.035-7. Domicilio: Luis Uribe N° 541, oficina 102, Antofagasta. Representante Legal: Moisés Saavedra Torres. RUT 16.822.085-5. Además S.S. se viene en corregir la suma, conciliando aquella con el cuerpo del escrito: “En lo principal: Deduce acción de Nulidad del Finiquito, en subsidio imposibilidad; Deduce conjuntamente demanda por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones. Primer Otrosí: Demanda Nulidad del Despido; Segundo Otrosí: Acredita personería y asume patrocinio; Tercer Otrosí: Forma de notificación”. Por tanto, sírvase S.S. tener por cumplido lo ordenado y en tal sentido dar curso progresivo a los autos. Resolución del Tribunal: Antofagasta, a veintinueve de abril de dos mil quince. Téngase por cumplido lo ordenado. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, firmese la presentación por quien corresponda, dentro de tercero día bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y archivo de los antecedentes. RIT O-323-2015. RUC 15-4-0016807-2. Proveyó don Carlos Eduardo Campillay Robledo, Juez Destinado al Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Cumple lo ordenado: S.J.L. del Trabajo Dayan Naranjo Tapia, por la parte demandante, en autos caratulados “Araya con Segurycsman SPA” RIT O-323-2015, a US respetuosamente digo: Que vengo en cumplir lo ordenado por SS adjuntando contestación que incluye las rectificaciones realizadas por esta parte solicitadas por S.S. conforme a resolución de fecha 27 de abril del presente año, debidamente firmada. Por tanto, Sírvase SS tener por cumplido lo ordenado y en tal sentido dar curso progresivo a los autos. Resolución del Tribunal: Antofagasta, a cuatro de mayo de dos mil quince. Por cumplido lo ordenado, se provee: A lo principal y primer otrosí: Téngase por interpuesta la demanda, traslado. Cítese a las partes a audiencia preparatoria, para el día 10 de junio de 2015, a las 09:30 horas, en las dependencias de este tribunal. En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio oral, como así también requerir las



diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria y acompañarse una minuta de la misma. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria; la que tendrá lugar con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra todas la resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. Al segundo otrosí: Téngase presente y por acreditada la personería para comparecer, con la copia del mandato judicial acompañado, digitalizado. Al tercer otrosí: Como se pide, vía correo electrónico. Notifíquese a la demandante por correo electrónico, a la demandada principal Segurycsman SpA, y a las demandadas solidarias: 1.- Grupo de Empresas Lince SpA División Servicios y 3.- Farmacias Cruz Verde S.A., conforme a lo prevenido en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo. Exhórtese a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad de Santiago para su distribución, a fin se notifique a la demandada solidaria 2, Rendic Hermanos S.A., RUT N°81.537.600-5, representada legalmente por don Víctor Briceño Espinoza, cédula de identidad N°9.068.949-5, ambos domiciliados en Avenida del Valle N°819, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, conforme a lo prevenido en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo. Exhórtese a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad de Santiago para su distribución, a fin se notifique a la demandada solidaria 4, Flowserve Chile S.A., RUT N°96.959.580-K, representada legalmente por don Juan Carlos Morena, cédula de identidad N°6.877.969-3, ambos domiciliados en Issa Pichara N°830, Sector B comuna de Renca, ciudad de Santiago, conforme a los previsto en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo. RIT O-323-2015 RUC 15-4-0016807-2. Proveyó don Carlos Eduardo Campillay Robledo, Juez destinado al Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Resolución del Tribunal: Antofagasta, a veinte de julio de dos mil quince. Existiendo constancia de la imposibilidad de notificar a la demandada Segurycsman SpA, RUT N°76.160.191-1 y a la sociedad Grupo de Empresas Lince SpA División Servicios RUT N°76.269.035-7, en los domicilios ya indicados, y, de conformidad a lo previsto en el artículo 439 del Código del Trabajo, publíquese por una sola vez en el Diario Oficial u

en otro diario de circulación nacional, extracto emanado del tribunal, que contendrá resumen de la demanda y copia íntegra de la resolución recaída en ella. Atendida la notificación ordenada, se reprograma la audiencia preparatoria fijada para el día 7 de septiembre de 2015, a las 08:30 horas, en dependencias del tribunal. La demandante deberá dar cuenta inmediatamente de efectuada la respectiva publicación, bajo apercibimiento de archivo de los antecedentes. Notifíquese por correo electrónico a la demandante. RIT O-323-2015 RUC 15-4-0016807-2. Proveyó don Jordan Rodrigo Campillay Fernández, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Autoriza doña Sandra Paola Monsalve Sánchez, Ministro de Fe, Jefe Unidad de Causas Sala del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Antofagasta, 27 de julio de 2015.

(IdDO 930792)  
**NOTIFICACIÓN**

Juzgado de Familia de Paillaco, causa RIT C-119-2014, ordenó notificar por aviso a demandada Yasna Paola Obando Asenjo, de la demanda interpuesta en su contra, de fecha 29 de agosto 2014, Alimentos, por don Gonzalo Eleazar Arcos Maldonado, en representación de su hijo Vicente Joaquín Arcos Obando. El demandante, en lo principal, interpone demanda de pensión de alimentos, solicita se acoja y se condene a la alimentante a pagar mensualmente a favor de su hijo, la suma de \$160.000 pesos. En el primer otrosí solicita alimentos provisorios por la suma de \$120.000 pesos, para que sea pagada desde la notificación de la demanda y durante la secuela del juicio. 1° septiembre 2014, tribunal resuelve: A lo principal, por interpuesta demanda, cita audiencia preparación juicio para día 29 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, bajo apercibimiento Art. 59 inciso 3° ley 19.968. Al primer otrosí, Tribunal resuelve: potestad cautelar ley 19.968 y, teniendo presente lo dispuesto Art. 4 de la ley 14.908, se fijan alimentos provisorios, hasta que se resuelva en definitiva, la suma de \$84.000 mensuales, a pagar mediante depósito en la cuenta de ahorro que el demandante abrirá en Banco Estado, debiendo hacerse efectivo el pago dentro de los 10 últimos días del mes de la notificación de la demanda. Demandado tendrá plazo de 5 días para oponerse monto provisorio decretado, luego de ser notificado. Se designa al demandado, conforme dispuesto Art. 18 Ley de Familia, al abogado del doble patrocinio

Corporación de Asistencia Judicial de Paillaco, horario de atención lunes desde 13:30 horas, calle Arturo Prat N°908, 2° piso, Paillaco, debiendo en todo caso el demandado tomar contacto con antelación a la fecha de la audiencia para hacer efectiva la designación antes indicada y ratificar por escrito con anterioridad a la audiencia preparatoria la designación efectuada; en caso contrario, se entenderá que no acepta la designación de abogado realizada por el Tribunal. Resolución 14 de julio de 2015. Atendido el mérito de los antecedentes, el encontrarse fallida la notificación de la parte demandada, toda vez que ha sido difícil determinar su residencia, y visto lo dispuesto en el artículo 2 ley 14.908, artículos 13 y 59 ley N° 19.968, y artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, tribunal resuelve: Fija audiencia preparatoria de juicio para el 28 de septiembre de 2015, a las 09:30 hrs. en dependencias de este Tribunal. Ordena notificar la demanda, la resolución de fecha 1 de septiembre de 2014 y la resolución de fecha 14 de julio de 2015, a la demandada mediante avisos extractados por el Sr. Ministro de Fe del Tribunal, debiendo practicarse la notificación a través de avisos en tres oportunidades por intermedio del Diario Austral de Valdivia y en una ocasión por el Diario Oficial, los días 1° o 15 del mes, todo a costa del solicitante. La parte demandante deberá realizar las gestiones necesarias para materializar la notificación ordenada dentro del plazo previsto en el artículo 59 inciso segundo de la ley 19.968, bajo apercibimiento de tener por retirada la demanda.- Secretario (S).

(IdDO 932826)  
**NOTIFICACIÓN**

Tercer Juzgado Letras La Serena, Rol C-1492-2015, “Astorga con Puentes” ordenó notificar por avisos Claudio Puentes Orellana medida prejudicial precautoria interpuesta por César Alejandro Astorga Araya fecha 23-04-2015. Principal: Medida prejudicial precautoria; primer otrosí: Monto de los bienes; segundo otrosí: Se tenga presente acción; tercer otrosí: Acompaña documentos; cuarto otrosí: Ofrece constituir fianza; quinto otrosí: Se resuelva sin previa notificación del demandado; en el sexto otrosí: ampliación del plazo para notificar y para presentar demanda; séptimo otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. César Alejandro Astorga Araya, a Us. respetuosamente digo: Solicito decretar contra Claudio Puentes Orellana, en carácter de prejudicial, precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos de

conformidad artículos 290, 279 CPC. Bienes: 1.- Casa habitación Pasaje Verónica N° 1015, sitio N° 25 manzana 28 del conjunto habitacional “La Florida”, Sector Tres, VII Etapa “H”, La Serena, fs. 3603 N° 3122 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, año 2006. 2.- Casa Habitación Avenida El Milagro N° 3276, sitio N° 76 de la manzana 1, Loteo Solar II y Lomas del Cerro Grande, La Serena, fs. 2174 N° 1594 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, año 2014. 3.- Automóvil Station Wagon marca Peugeot Modelo 3008 LTD HDI 1.6 Placa Patente DZJR.44-5, Color Gris Shark, N° motor 10JBER0009213 N° Chasis: VF30U9HR8CS096753, año 2012. Resolución: La Serena, 28-04-2015. Por rendida la fianza. Proveyendo la presentación de fojas 74, a lo principal, primer, quinto y sexto otrosíes, atendido el mérito de los autos y lo previsto en los artículos 290 N° 4, 296 y 302 CPC, ha lugar a conceder desde ya la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, debiendo notificar a la parte demandada dentro del plazo de 30 días hábiles, personalmente o por cédula. Al segundo y séptimo otrosíes, téngase presente. Al tercer otrosí, por acompañados los documentos, con citación. Al cuarto otrosí, por rendida la fianza nominal. Solicitud: Para evitar futuras nulidades solicito a Us. se sirva disponer la notificación por avisos. Resolución, La Serena 10-07-2015, a lo principal, como se pide, de conformidad con artículo 54 del CPC, ha lugar, procédase a notificar Medida Prejudicial Precautoria, su proveído, solicitud que antecede y la presente resolución a Claudio Andrés Puentes Orellana, por medio de avisos redactados por el señor Secretario del Tribunal, los cuales deber publicarse en el diario El Día de esta ciudad, por tres días distintos, sin perjuicio de la publicación en el Diario Oficial de la República de Chile. Al otrosí, como se pide, por treinta días. La Serena, 6 de agosto de 2015.

(IdDO 932839)  
**NOTIFICACIÓN**

Tercer Juzgado de Letras de La Serena, en causa Rol C-1492-2015, caratulada “Astorga con Puentes”, se ordenó notificar por avisos a Claudio Puentes Orellana medida prejudicial precautoria interpuesta por César Alejandro Astorga Araya con fecha 1 de junio de 2015, quien solicita: en lo principal: demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario; primer otrosí: Solicita se mantenga la medida prejudicial precautoria; segundo

otrosí: Acompaña documentos. Pamela Cecilia Astorga Páez, abogada, en autos caratulados “Astorga con Puentes” Rol N° 1492-2015, a Us. digo: encontrándome dentro del plazo vengo en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Claudio Puentes Orellana, según los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer. Los hechos: demandado propuso al demandante negocio para colocación de yeso proyectado. Demandante aportó la suma de \$30.000.000.- que demandado depositó en sus cuentas personales y con posterioridad pidió liquidación voluntaria de empresa. Prestaciones demandadas: Daño emergente: \$30.000.000.- Lucro cesante \$80.000.000.- Daño moral, por la suma de \$50.000.000.- El derecho Art. 1.437 del Código, Art. 2314 del Código Civil. Por tanto: Sírvase Us. tener por interpuesta demanda ordinaria de indemnización de perjuicios en contra de don Claudio Andrés Puentes Orellana, ya individualizado en estos autos, acogerla a tramitación y en definitiva se pronuncie declarando la correspondiente responsabilidad extracontractual del demandado, condenándolo al pago de las sumas indicadas o las que SS. estime en derecho. Resolución: A lo principal, por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, traslado. Al primer otrosí, como se pide, manténgase la medida precautoria. Al segundo otrosí, téngase por acompañados con citación. Cuantía \$160.000.000.- La Serena, 6 de agosto de 2015.- Erick Barrios Riquelme, Secretario Subrogante.

(IdDO 933177)  
**NOTIFICACIÓN**

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Merced 360 Santiago. En autos Juan Marcelo Azúa Parra con Compra Venta e Instalación de Equipos Electrónicos y Eléctricos Rubén Isaac Briceño Uribe E.I.R.L., RIT M-2394-2014 RUC 14-4-0046784-7, se ha ordenado notificar por avisos lo siguiente: Extracto de la demanda: En lo principal: interpone Demanda de Cobro de Prestaciones Laborales; Juan Marcelo Azua Parra, técnico eléctrico, domiciliado en Ermitaño 7676, comuna de Cerrillos, a US respetuosamente digo: interpongo demanda, conforme al procedimiento monitorio, por cobro de prestaciones laborales, contra Compra Venta e Instalación de Equipos Electrónicos y Eléctricos Rubén Isaac Briceño Uribe E.I.R.L., cuyo nombre de fantasía es Daar Services EIRL, persona jurídica del giro de su